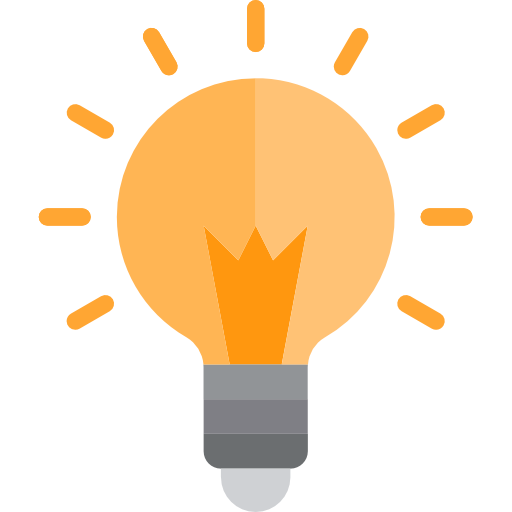
|  |
| --- |
| **INSTRUCTIVO** |



**EL MODELO DE NOTA COMIENZA EN LA PRÓXIMA PÁGINA.**



**PARA PRESENTAR LA NOTA RECORDÁ LO SIGUIENTE:**

1. **Es un modelo**: puede modificarse en función de la situación de cada persona.
2. **Se basa en la ley 24.901**: si tu provincia no adhirió al régimen de la ley, tenés que fundarlo en la ley provincial que regula las prestaciones que se brindan a las personas con discapacidad.
3. Si tenés **problemas con más de una prestación, podés armar una sola nota** que distinga con claridad los inconvenientes y argumentos aplicables a cada petición.
4. Al presentar la nota, **solicitá el número de expediente administrativo** que se le haya asignado **y un número telefónico** para realizar el seguimiento de tu reclamo.



**¿CÓMO COMPLETAR EL RECLAMO?**

1. **Completalo en computadora**. Entre paréntesis, vas a encontrar datos que se incluyen a modo de guía. Si entre paréntesis hay ejemplos, elegí el que sea acorde a tu situación o completá el apartado de acuerdo a tu caso particular.
2. **No olvides borrar** las líneas y todo aquello que está entre paréntesis y resaltado, una vez que hayas completado el reclamo.

|  |
| --- |
| **EJEMPLO**  **ANTES**:  “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(completar con nombre y apellido de la persona que presenta el nota)*, DNI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(completar con el n° de DNI si la persona que presenta el reclamo es la persona con discapacidad. Si quien presenta el reclamo lo hace en representación de la persona con discapacidad, completar con el n° de DNI y agregar: “en representación de + nombre y apellido, y DNI de la persona con discapacidad”, por ejemplo: Juan Gómez, DNI XXX, en representación de María Gómez, DNI XXX)* me dirijo…”  **DESPUÉS**:  Si lo presentás en nombre propio:  “María Gómez, DNI 38.964.235, me dirijo…”  Si lo presentás en representación de la persona con discapacidad:  “Juan Gómez, DNI 25.493.557, en representación de María Gómez, DNI 38.964.235, me dirijo...” |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(completar con lugar y fecha, por ejemplo: San Luis, 22 de marzo de 2019)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(completar con el organismo provincial correspondiente, por ejemplo: Ministerio/Secretaría de Salud)*

**S / D**

De mi mayor consideración,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*completar con nombre y apellido de la persona que presenta el reclamo*), DNI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*completar con el n° de DNI si la persona que presenta el reclamo es la persona con discapacidad. Si quien presenta el reclamo lo hace en representación de la persona con discapacidad, completar con el n° de DNI y agregar: “en representación de + nombre y apellido, y DNI de la persona con discapacidad”, por ejemplo: Juan Gómez, DNI XXX, en representación de María Gómez, DNI XXX*) me dirijo a Ud. a fin de solicitarle que con carácter urgente brinde la cobertura total e integral (100%) de la prestación de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(completar detallando la terapia de habilitación o rehabilitación, por ejemplo: equinoterapia)*, de conformidad con el artículo 15 de la ley 24.901. De lo contrario, se iniciarán las acciones legales correspondientes.

1. **Hechos**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (completar con: “Soy” si la persona que presenta el reclamo es la que necesita la terapia. Si quien lo solicita lo hace en representación de la persona con discapacidad, completar con: nombre y apellido de la persona que requiere la terapia + “es”)*  una persona condiscapacidadconforme se acredita con la copia simple del Certificado Único de Discapacidad que se adjunta a la presente nota*,* que precisa realizar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(completar detallando la terapia de habilitación y/o rehabilitación, por ejemplo: equinoterapia)* los días \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*completar con los días de concurrencia)* de \_\_\_\_ a \_\_\_\_ *(completar con el horario de concurrencia)* en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*completar con el nombre y la dirección exacta del lugar donde se debe hacer la terapia),* ya que \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(detallar las razones del pedido).* Dicho pedido se funda en el dictamen del/de la Dr./a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(completar con el nombre del/de la dr./a que indicó la terapia)*,quien brindó razones técnicas para avalar su indicación, tal como surge de la documentación adjunta *(es importante presentar una copia del informe o certificado de/de la profesional junto con el presente reclamo)*.

En este sentido, el Estado, a través de sus organismos dependientes, debe brindar a las personas con discapacidad que carecen de cobertura de salud, el acceso a la totalidad de las prestaciones básicas comprendidas en la ley 24.901 (arts. 3 y 4, ley 24.901 y art. 4 ley 22.431), incluyendo la prestación solicitada.

Negar la prestación se encontraría en clara contradicción con la normativa nacional que regula las obligaciones del Estado con relación a las prestaciones a favor de las personas con discapacidad (ley 24.901 y ley 22.431) y conduciría a la vulneración de sus derechos fundamentales, en particular en particular del derecho a la habilitación y rehabilitación, a la salud, a la igualdad, a la accesibilidad, a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, todos ellos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

1. **Argumentos que sustentan el reclamo**

En 2006, la CDPD plasmó normativamente un cambio de paradigma en materia de discapacidad, al entender que las causas que la originan no son netamente individuales sino preponderantemente sociales[[1]](#footnote-1). Al tratarse de una construcción social y no de un “problema” del individuo, los Estados deben adoptar las medidas que sean necesarias para accesibilizar los entornos, a fin de que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente todos sus derechos. La Convención reconoce el respeto de la dignidad, la autonomía individual y la independencia de las personas con discapacidad como algunos de sus principios rectores, para lo cual considera central la eliminación de todas las barreras (económicas, actitudinales, físicas, etc.) que impidan su participación efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Argentina ha ratificado la CDPD en 2008 (ley 26.378), y en 2014 le ha otorgado jerarquía constitucional (ley 27.044). Nuestro país tiene, por lo tanto, la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos enunciados en ella[[2]](#footnote-2).

En el artículo 26, este instrumento dispone que *“los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes (...), para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida”*. Para ello, deberán organizar, intensificar y ampliar servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación (en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales) que comiencen en la etapa más temprana posible, se basen en una evaluación multidisciplinar, estén a disposición de las personas lo más cerca posible de sus comunidades y apoyen su participación e inclusión en la comunidad. Los Estados también tienen la obligación de promover la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos para la habilitación y rehabilitación.

En relación a la salud, el artículo 25 señala que “*los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad (...)*”.De acuerdo a lo establecido en la Constitución de la OMS, la salud no es solo la ausencia de enfermedades, sino que es un concepto integral, referido al bienestar psicofísico, mental y social y ligado a una calidad de vida adecuada. En similar sentido, nuestra Corte Suprema de Justicia tiene dicho que el derecho a la salud debe ser interpretado en sentido amplio y que guarda relación con el principio de dignidad humana, soporte y fin de todos los derechos[[3]](#footnote-3). A su vez, la Observación General n° 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresa que *“el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos”*[[4]](#footnote-4).

A nivel nacional, la ley 24.901 establece un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad. Dicha norma dispone que las obras sociales y empresas de medicina prepaga tienen a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley (art. 2), que requieran sus afiliados/as con discapacidad. Ahora bien, **su artículo 4 es claro al establecer que las personas con discapacidad que no posean obra social o prepaga *“tendrán derecho al acceso a la totalidad de las prestaciones básicas comprendidas en la presente norma, a través de los organismos dependientes del Estado”.*** Similar disposición contiene la ley 22.431 de protección integral de las personas con discapacidad, que en su artículo 4 dispone que el Estado, a través de sus organismos, brindará a las personas con discapacidad no incluidas dentro del sistema de las obras sociales las prestaciones que regula la ley 24.901.

Dentro del conjunto de prestaciones que enuncia la mencionada ley, en el artículo 15 se definen como prestaciones de rehabilitación *“aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición y/o restauración de aptitudes e intereses para que un persona con discapacidad, alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su integración social (...), utilizando para ello todos los recursos humanos y técnicos necesarios”.* Al mismo tiempo, la norma dispone que **“*en todos los casos se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fuere menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera”*.**

La justicia sostuvo que la misión del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad es brindar a todas ellas una cobertura integral para su rehabilitación que garantice el adecuado nivel de calidad y un uso eficiente de los recursos existentes, con vistas a la realización independiente y a su integración plena en la vida social[[5]](#footnote-5)*.* Expresó también que la ley 24.901 *“(...) establece que son principios fundantes del Sistema Nacional del Seguro de Salud -en primer lugar- la búsqueda del pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación de ninguna clase y -en segundo término- la provisión de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones (...)”*[[6]](#footnote-6).

**La prestación que aquí se solicita, además de estar garantizada expresamente en la legislación nacional, facilita el ejercicio de una pluralidad de derechos consagrados en la CDPD y se halla indisolublemente ligada a la posibilidad de llevar una vida digna e independiente.** Por lo tanto, el Estado, como garante de los derechos humanos, debe adoptar todas las medidas necesarias para asegurar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos sin discriminación y no puede válidamente negarse a brindar esta prestación ni otorgarla irregularmente.

Por todo lo expuesto, el Estado a través de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(completar según corresponda con: Ministerio de Salud, Secretaría de Salud, etc.)* debe brindar la cobertura total e integral (100%) de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(completar detallando la terapia de habilitación o rehabilitación, por ejemplo: equinoterapia)*. Asimismo, deberá aplicar las sanciones correspondientes cuando procedan.

1. **Prueba**

Adjunto en este acto copia simple de la siguiente documentación:

1. Certificado Único de Discapacidad.
2. Informe médico de fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(completar con la fecha del certificado)* suscripto por el/la Dr./a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(completar con el nombre del/de la médico/a. El certificado debe ser actual, contener de manera específica el diagnóstico, e indicar la terapia con cantidad de días/sesiones y el tiempo de duración del tratamiento).*
3. **Solicitud**

A raíz de lo expuesto, le solicito que de modo inmediato brinde la cobertura total e integral de la prestación solicitada (art. 15, ley 24.901). De lo contrario, se iniciarán las acciones legales correspondientes. Finalmente, solicito que tenga a bien dar respuesta por escrito a la presente solicitud.

Sin otro particular y a la espera de su pronta respuesta, lo/a saludo cordialmente.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(firma y aclaración de la persona que presenta el reclamo)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(completar con los datos de contacto de la persona que presenta el reclamo: teléfono, correo electrónico y/o domicilio)*

1. Palacios, A. y Bariffi, F., La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Una aproximación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CINCA, Madrid, 2007, pág. 19. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bariffi, F., El régimen jurídico internacional de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y sus relaciones con la regulación actual de los ordenamientos jurídicos internos, 2014, pág. 181-182. [↑](#footnote-ref-2)
3. C.S.J.N., “Echavarría, Ana M. c. Instituto de Obra Social”, 12/12/2002. La Ley Online; Cita Fallos Corte: 325:3380; Cita Online: AR/JUR/6818/2002) (Fallos 323:3229, consid.16 y sus citas y 324:3569, consid.11 y sus citas. [↑](#footnote-ref-3)
4. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General n° 14 sobre “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”, E/C.12/2000/4, 11/8/2000, párr. 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Cámara de Apelaciones en los Civil y Comercial de Salta, Sala III, “F., M. de L.; C., S. en rep. del menor; C., I. J. vs. Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.) - Amparo”, Expte. Nº CAM 452.580/13, 9/5/2014. [↑](#footnote-ref-5)
6. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “G. M. C. y os. c/ OBSBA s/ amparo”, 15/7/2015. [↑](#footnote-ref-6)